

DESAYUNO CON CAMDESSUS
(Artículo Publicado en el Universal del 13 de junio de 1996)

Alberto Quirós Corradi¹

Por cortesía del director ejecutivo por Venezuela, doctor Luis Enrique Berrizbeitia, fuimos invitados a participar el domingo 02 de junio de 1996 en un desayuno, al cual asistieron el director general del FMI, señor Michel Camdessus y varios de sus asesores, entre los cuales se encontraba el señor Muñiz, quien dirige las negociaciones de dicha institución con el Gobierno de Venezuela.

Desde el comienzo quedó absolutamente claro que el señor Camdessus esta allí para oír a los presentes las observaciones que quisieran hacerle a la Agenda de Venezuela, a la medidas económicas tomadas a la fecha, y a las expectativas que se tuvieran con relación a la política económica que pudiera haber sido informada al Fondo Monetario Internacional por parte del Gobierno de Venezuela.

Como era de esperarse, dado que de unos 30 invitados unos 25 eran economistas, las primeras intervenciones giraron casi exclusivamente alrededor del acto económico. Allí se tocó de todo un poco: "El plan es rentista y fiscalista". "Es cortoplacista". "No aclara suficientemente la política cambiaria". "¿Anclaje de la tasa de cambio nominal o real?". Los efectos son sensiblemente diferentes en uno u otro caso. El control de la inflación, sujeto a como se logre, podría resultar en un estancamiento de la economía, como ha sucedido en Argentina.

El doctor Gil Yépez acotó que el problema a revisar no era sólo de ingresos sino que había que examinar también a los egresos y propuso que se estableciera una condición mediante el cual cada dólar que ingresara al país, vinculado al acuerdo con el FMI, tuviese una contrapartida de dos dólares generados por privatizaciones en Venezuela. (Excluyendo cualquier monto derivado de una privatización parcial total de Pdvsa). El comentario de Camdessus, quien exhibió buen humor toda la mañana, fue que FMI no imponía reglas "tan duras" como las sugeridas por Gil Yépez.

Hubo también preocupación entre algunos de los asistentes -yo entre ellos- sobre la confiabilidad de los datos estadísticos sobre nuestro gasto público que manejó el

¹El Dr. Quirós Corradi es columnista de el Universal, con la autorización del Dr. Alberto Quirós Corradi, reproducimos el artículo publicado en EL UNIVERSAL, jueves 13 de junio de 1996, 2-2.

Fondo Monetario Internacional, ya que nuestros presupuestos nacionales no son - precisamente- un modelo de eficiencia, veracidad y profesionalismo, como para servir de base análisis que pretenda ser serio. Más aún, aparente positivo esfuerzo que ha hecho el Ejecutivo por reducir gasto público, ni es positivo, ni es sostenible. El gasto se ha reducido porque se han recortado los rubros de la inversión pública en todos los sectores y los porcentajes del gasto en relación al PIB en los sectores críticos: educación, salud e infraestructura física. El comentario del señor Camdessus no pudo ser más lapidario: "Estas son las negativas consecuencias de aplicar por dos años políticas económicas equivocadas y mecanismos correctivos que no hacen sino empeorar la situación a corto, mediano y largo plazos".

Otra observación importante fue hecha en relación con las *privatizaciones y el tamaño del estado*. Si tomamos el "debe" y "haber" contable de Venezuela, no hay la menor duda que nuestro patrimonio es altamente positivo. Tenemos "activos" que valen infinitamente más que a nuestros "pasivos". Nuestro problema es que no estamos generando "caja" suficientemente para atender debidamente las obligaciones del estado. En palabras simples, lo que lo anterior significa es que tenemos activos que teóricamente valen "mucho" y en la realidad producen "poco". Bien porque están siendo mal administrados (las empresas del Estado en general), o porque están siendo subutilizados (los recursos auríferos). Al no generar los activos existentes lo que podrían producir, efecto multiplicador negativo sobre la productividad potencial nacional es enorme. Nos producen los activos. No hay - pues- disponibilidad de caja para reinvertir en -por ejemplo- infraestructura física, que, a su vez, serviría de apoyo a nuevos esfuerzos productivos que generarían caja para seguir reinvertiendo, crear puestos de trabajo, cobrar -entonces- más impuestos y tener disponibilidad de caja para invertir más y mejor en educación y salud. Lo cual a mediano plazo capacitaría a muchos de nuestros ciudadanos para el trabajo.

Y así sucesivamente seguiría una cadena de productividad, hoy interrumpida por el capricho de aquellos que habiendo destruido el aparato productivo del país, continúan arropándose con la bandera de la defensa del patrimonio nacional no sean importantes. Lo son. Pero, para mí la soberanía no se pierde -por ejemplo- porque el sector privado *opere* las empresas "básicas" sean las que sean estas empresas. Ni mucho menos porque los recursos del subsuelo sean propiedad de la *Nación* a fin de que el *Estado* cumpla con su rol de coordinador y administrador de la cosa pública, pero actuando como *representante* de los nacionales (nosotros) y no usurpando un *derecho de propiedad* que no tiene. La respuesta de los defensores del "más de lo mismo" a estas aseveraciones es recomendar una reestructuración del aparato productivo del estado y de sus empresas.

El problema es que ya el estado actual (Petro-Estado) no merece más oportunidades para "reestructurarse" y que -en todo caso- la conceptualización de sus objetivos y metas es ya obsoleta. Más aún, el problema de "caja" es un problema urgente que ya no espera por la transformación del Estado para su solución. Es por

todo eso que hay que vender algunos de nuestros activos para -gústenos o no- salir del atolladero en el cual nos han metido, precisamente los que hoy posan como defensores de nuestro patrimonio. El 45% de la población ya está en condiciones de pobreza crítica y el Estado sigue sentado sobre inmensos recursos no utilizados adecuadamente.

Sobre el tamaño del Estado, ya lo dijo el contralor: el 80% del gasto público total, corresponde a la llamada administración descentralizada, que es donde están -precisamente- las empresas del Estado. Este es el sector que hay que reducir ya. En cuanto a la administración central, las acciones parciales que podrían conducir a incrementar su eficiencia están -por una parte en la descentralización, entendiéndose ésta no como un estímulo para la creación de un sistema federativo, sino más bien como un proyecto para transferirle a las regiones las obligaciones operativas de algunos planes que, por su naturaleza, deben tener un alto componente de programas de carácter nacional. Educación y salud son dos ejemplos donde el acto operativo regional no tiene por qué interferir con la formulación de programas básicos nacionales para ambos sectores. El mismo concepto se le puede aplicar a lo que "opera" el sector privado. En los dos casos, la operación por parte de un sector u otro no debe modificar la filosofía central de los programas nacionales de educación y salud, que son los que hemos escogido como ejemplo, para ilustrar el punto. Pero desde luego que, no son los únicos a los cuales se les puede aplicar la tesis de que separar el acto operativo de la planificación estratégica mejora el resultado global.

En definitiva, hubo en la reunión serios cuestionamientos de tipo técnico sobre la Agenda Venezuela y muchas dudas sobre sus posibilidades de éxito sostenido. Sin embargo -a mi manera de ver- no es lo técnico/económico donde hay que buscar los posibles beneficios que obtuvo el señor Camdessus y su equipo, derivados de la reunión aquí comentada.

Lo más novedoso para los representantes del Fondo Monetario Internacional fueron -probablemente- las "amenazas no económicas", tal como las definió Andrés Stambouli, quien abrió la discusión sobre estos aspectos a "fuego cerrado". Lo expresado por Stambouli y otros incluyó lo siguiente:

-Todas las instituciones del país son débiles y poco representativas de lo que pretenden representar. Esto dificulta consensos institucionales, a veces imprescindibles, para poder lograr verdaderos cambios estructurales de nuestra sociedad.

- La calidad y la cantidad de la información al público sobre la Agenda Venezuela es deficiente. Se requiere un esfuerzo global y coherente por parte del Gobierno y de las instituciones que apoyan las nuevas estrategias del desarrollo para "educar" a la gente.

- No hay verdadero apoyo entusiasta de la ciudadanía a las nuevas medidas (ni siquiera de Caldera, expresó una asistente). A pesar de que las estadísticas económicas y sociales de 1992 fueron todas "buenas", la gente -después de varios años- aún no ha entendido la naturaleza y necesidad de las medidas tomadas antes y, hasta cierto punto, repetidas ahora. Esto es peligroso porque pudiera resultar en protestas sociales graves de empeorar sensiblemente la situación económica de la mayoría.

- En período 1989-1992, hubo énfasis en establecer una política económica coherente, pero sin poder establecer una política igualmente coherente para los otros sectores de la vida nacional (sociales y políticos). Ahora habría que examinar todas estas variables, a fin de no repetir el mismo error.

- Hay que incorporar, en los mecanismos de decisiones importantes, a los gobernadores y alcaldes a quienes, sin su participación activa, se les han impuesto decisiones tomadas por el poder central. Más aún, durante estos dos años de gobierno se ha combatido -de hecho- a la descentralización.

-Se recomendó (Quirós) estimular el ahorro interno como ingrediente esencial de cualquier programa económico. Para ello se deberían utilizar las privatizaciones de empresas del estado, para que un porcentaje de sus acciones pudieran ser obtenidas -en forma preferencial- por nuestros ciudadanos (hasta gratuitamente, si así conviniese al interés nacional).

Además habrá que colocar algunas de ellas en las bolsas de valores nacionales. No hay en Venezuela- verdaderas alternativas -visiblemente atractivas- para canalizar al ahorro interno por vías diferentes al de la Banca Nacional. No puede haber una bolsa de valores atractiva en un país, donde las empresas que explotan nuestras rentables riquezas naturales (petróleo, gas, oro, hierro, diamantes, bauxita, etcétera), son todas del estado y -por lo tanto- los ciudadanos no han tenido, ni tienen acceso directo ni a la propiedad, ni a los beneficios de esas empresas.

- El Estado, en su forma actual, es incompetente para administrar el proceso de cambio y requiere -por su parte- de una drástica reestructuración.

- Se requiere acompañar, a cualquier programa económico, de programas sociales eficientes y de una reforma política que vaya al fondo del problema y examine -de verdad- las características negativas de ser y haber sido -por mucho tiempo- un Petro-Estado.

-Es imprescindible una reforma de nuestro sistema legal. En este sentido el señor Camdessus interrumpió la muy lúcida exposición que, sobre este tema, hacía la doctora Elsa Cardozo para proponer una encuesta: "Supóngase que ustedes son inversionistas potenciales en Venezuela y que para invertir

necesitan tener confianza en el sistema legal del país. ¿Quién de ustedes tiene esa confianza? Levanten por favor la mano". Nadie hizo la "señal de costumbre". Camdessus se mostró muy sorprendido de esta respuesta. Dijo que Venezuela ha sido el único país donde el rechazo y la desconfianza en el sistema de justicia se manifestó en forma unánime. (Otro récord negativo).

Antes de finalizar quisiera reflejar algunas impresiones que me quedaron relacionadas con la delegación del FMI que nos visitara. El señor Camdessus es un buen administrador del tiempo y no se siente cómodo con explicaciones demasiado generales: "las instituciones no funcionan". ¿Cuales? "El gasto en educación y salud ha disminuido". ¿Cuanto? "Hay gastos excesivos en la Administración Pública". Dígame tres rubros que usted eliminaría... y así por el estilo. ¡Bien por Camdessus!

Por otra parte, la delegación del FMI no dio la impresión de dominar las grandes cifras de nuestra economía y -a veces- parecía que los delegados le daban un valor positivo a lo cuantitativo de cierto hecho sin haber examinado lo cualitativo de ellos. Dos ejemplos ilustran el punto:

1. El señor Muñiz parece estar favorablemente impresionado por el hecho de que el gasto público haya disminuido en los dos últimos años en términos reales. Cierto. Pero -como ya hemos dicho- esa reducción fue hecha castigando a sectores como educación y salud, donde había que haber gastado más y no menos.

2. Los delegados del FMI se mostraron aparentemente satisfechos con el manejo presupuestario, que ha hecho el Gobierno del gasto social. En esta proposición se confunden, *rubros* presupuestarios, con *desembolsos* reales. Hay aprobaciones presupuestarias que no se han desembolsado y préstamos otorgados por instituciones multinacionales sobre los cuales la nación ha pagado intereses y penalidades sin utilizarlos (Véase mi artículo: El país de "Ripley". ¿Sabía usted que..."? El Universal 16/05/96). Todo lo cual no debe verse como positivo, sino como una manifestación más de la incapacidad del Estado actual de gerenciar adecuadamente los procesos de cambio.

¿Cómo puede ser eficaz un Estado que -por una parte- hace todo tipo de acrobacias conceptuales para cambiar su viejo discurso por un puñado de dólares "nuevos", mientras que - al mismo tiempo- tiene acceso a muchos dólares "viejos" que no pueden gastar aun cuando las necesidades lo estén mirando de frente?

Como conclusión, mía exclusivamente, (en el sentido de que no quiero comprometer a ninguno de los asistentes con mi opinión), pienso que los problemas técnicos/económicos de la Agenda Venezuela, son probablemente superables cuando el Gobierno decida apoyar a su gestión con un equipo verdaderamente profesional.

La muy real dificultad la veo en los aspectos no económicos del problema. En la posible ausencia de voluntad política para tomar las medidas que se requieren para acompañar al acto económico e impedir que, por causa de la solitaria presencia -de ese acto económico- la reforma integral de la sociedad venezolana no se materialice y que -por el contrario- lo que sufran sean las presiones negativas que inevitablemente estarán presentes -por lo menos- en el corto plazo.

La triste consecuencia de suceder esto, sería que -de nuevo- el sacrificio ciudadano habría sido inútil y, más temprano que tarde, tendríamos que abocarnos a una nueva reforma, esta vez integral.

La gran pregunta es: ¿Cuántas seudoreformas resistirá este sistema antes de que se derrumbe por "las malas"?